



Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social

Depósito Legal: TF-135-98 / ISSN: 1138-5820

Año 6º – Director: **Dr. José Manuel de Pablos Coello**, catedrático de Periodismo

Facultad de Ciencias de la Información: Pirámide del Campus de Guajara - **Universidad de La Laguna** 38200 La Laguna (Tenerife, Canarias; España)

Teléfonos: (34) 922 31 72 31 / 41 - Fax: (34) 922 31 72 54

La prensa en El Salvador: tolerancia al mejor postor

Lic. Eric Lemus ©

Profesor de Periodismo – Universidad Centroamericana de El Salvador

El periodismo salvadoreño en el año 2002 estuvo marcado por la presión política, empresarial y las agresiones a la prensa de parte de distintos actores. Una característica que parece afincarse en el trabajo de campo es el riesgo a reportear cualquier evento público. Sufrir el impacto de una bolsa con agua o un empujón puede suceder en cualquier evento público, desde una huelga de médicos hasta en una pelea de vendedores callejeros que protestan por su desalojo.

¿La prensa salvadoreña sufre un problema de credibilidad o el respeto al derecho a informar no existe? Las encuestas todavía registran a los medios de comunicación, después de la Iglesia Católica, como uno de los sectores con mayor credibilidad en el país.

Entonces ¿qué origina las agresiones verbales y físicas contra los fotoperiodistas y reporteros cuando realizan su trabajo? Y finalmente, ¿cuál es el trabajo de un periodista? ¿Debe dejarse informar a un periodista claramente identificado con el gobierno u obstaculizarlo a toda costa? ¿Es el periodista el responsable de la línea editorial del medio que representa? ¿Hay comunicadores de derecha o izquierdas? Lo cierto es que el año 2002 estuvo determinado por la agenda preelectoral y ningún hecho noticioso pudo verse al margen del contexto político. La mayoría de la población reconoce cuándo un periódico o un canal de televisión está tomando parte.

Este año, por ejemplo, los salvadoreños fuimos testigos del pre-candidateo de un reportero y del mismo director de un noticiero televisivo para aspirar a un cargo público con el partido oficial, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Y, por otro lado, el salvadoreño promedio no ignora que la huelga de los médicos es el reflejo más fidedigno de cómo la línea editorial de la prensa escrita ha tomado parte. Durante el año ha prevalecido un alto nivel de intolerancia hacia el trabajo de algunos medios de comunicación y sus periodistas. Y una verdad poco a poco se va volviendo más clara: La falta de credibilidad en ciertos medios salvadoreños es alta, debido a prácticas antiéticas en el ejercicio profesional, que han permitido que algunos grupos sociales sobrepasen el insulto y agredan físicamente a periodistas. Erradicar el problema no es fácil, sobre todo, después que el mismo director de El Noticiero (un telediario local, el señor Julio Rank, aspire a ser congresista por la derecha. "Siempre he sido simpatizante de ARENA (el partido gobernante)". Entonces, donde queda el eslogan que tanto alarde hace este informativo: "Nuestra misión es informar con imparcialidad..." y blah-blah...

Esa es una tarea pendiente para directores o propietarios de medios a fin de evitar que estos sean parte de estrategias políticas e incumplan el deber de servicio a la población porque, a simple vista, nadie cree que la credibilidad y la ética vendan.

Otro factor negativo en el ejercicio del periodismo salvadoreño es el sesgo para obtener información pública en poder de funcionarios de gobierno.

La Corte de Cuentas de la República (Contraloría) logró crear una ley mordaza que deja a discreción del titular del ramo, Hernán Contreras, cuándo los resultados de una auditoría serán públicos. La ley fue creada prácticamente para violentar el derecho de información y afecta el trabajo de algunos medios de comunicación. La Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), cuyo presidente es el empresario salvadoreño Antonio Saca, protestó la medida que fue cocinada dentro de la Asamblea Legislativa. Pero a nadie le extraña el papel del primer órgano del Estado ya que la misma Junta Directiva del parlamento impide cotidianamente el acceso de la prensa a sus reuniones. A los agresores tradicionales de los periodistas, como funcionarios públicos, líderes de opinión, políticos, se suman las amenazas de los mismo directores de medios de comunicación, como el periodista chileno Narciso Castillo, de canal 33, quien no dudó en calificar de delincuente a un fotoperiodista, que captaba imágenes de él, luego que el periódico La Prensa Gráfica publicó una investigación donde se revelaba su trabajo como asesor de la Corte Suprema de Justicia y la posibilidad de sufrir un conflicto de intereses.

Además, durante el año la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y TV Doce fueron atacados constantemente en los editoriales de El Diario de Hoy y columnas sensacionalistas del periódico Más.

Lo más grave fue la declaración del director ejecutivo de aquel periódico y relator de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Fabricio Altamirano, quien afirmó: "La APES carece absolutamente de credibilidad", al tiempo que el periódico censura un Código de Ética de la Prensa de El Salvador (impulsado por la gremial), que busca un periodismo serio, responsable y

democrático, una lucha que paradójicamente también es encabezada por la misma SIP.

Y por su lado, La Prensa Gráfica no fue tolerante con el columnista Juan José Dalton, y repitió la actuación de El Diario de Hoy, del año 2000, al separarlo de su plana, al considerar que su referencia al juicio contra dos generales salvadoreños en Estados Unidos, condenados a pagar una millonaria suma de indemnización a tres civiles víctimas de abusos durante la guerra, no era acorde a su línea editorial.

Otra señal de intolerancia matizada con libertad empresarial se produjo con el cierre automático de una radioemisora local, que había logrado una buena aceptación por sus espacios pluralistas, de debate y participación. El nuevo propietario, el gastroenterólogo José Luis Murra Saca, quien preside la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), prefirió convertirla en una estación musical.

Limitaciones al trabajo, agresiones, sesgos vienen de todas partes en El Salvador, un país que se precia de ser modelo ante la comunidad de naciones, luego de firmar los Acuerdos de Chapultepec en enero de 1992, que pusieron fin a una guerra civil fratricida que le cobró la vida a cerca de 70 mil salvadoreños a lo largo de doce años. Casi al cierre del año, el 21 de diciembre de 2002, la reportera Carmen Molina Tamacas y un fotoperiodista de Diario El Mundo fueron agredidos por supuestos sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) frente al Hospital de Especialidades. "Váyansen de aquí", le advirtieron. El fotoperiodista tomó las imágenes de los supuestos trabajadores del ISSS, lo que desató un forcejeo. Uno de ellos se levantó y se abalanzó contra el fotoperiodista, intentó quitarle la cámara fotográfica y finalmente lo golpeó en la mandíbula.

El 14 de noviembre, la APES condenó enérgicamente las agresiones en contra de periodistas, por parte de manifestantes que protestaban contra la privatización de la salud. Los periodistas Fernando Aragón y Carlos Ortiz de "El Noticiero", así como el fotoperiodista de "El Diario de Hoy", Miguel Hernández, fueron agredidos verbalmente e intimidados por parte de algunos manifestantes, quienes obstaculizaron su trabajo informativo en los alrededores del Hospital Médico Quirúrgico. A estos dos hechos se suma la agresión en contra de la corresponsal de "La Prensa Gráfica" en San Vicente, Cecilia Ortiz, agredida físicamente por sindicalistas del Hospital Santa Gertrudis. Esa lógica de la intimidación persiste en el año 2003.

El 8 de enero la APES nuevamente condenó las agresiones en contra de periodistas, por parte de sindicalistas y manifestantes que protestaron hoy en contra del gobierno. El Periodista Gonzalo Tejada camarógrafo de "El Noticiero" de Canal Seis, resultó herido por una piedra lanzada en su contra por los manifestantes, mientras la reportera María José Monjarás de TCS Noticias y Alonso Oviedo de Tele-2, fueron agredidos verbalmente y acosados por manifestantes. Los agresores pretendieron impedir la cobertura periodística de la ocupación de la catedral metropolitana de San Salvador. Esta fue la primera agresión contra la prensa. Tras este contexto cabe preguntarse ¿Cuál es el alcance y el límite del derecho a la información? ¿Es un derecho asimilado por el salvadoreño promedio? ¿Existe la suficiente tolerancia para el ejercicio del periodismo en este país ejemplo de democracia?

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS:

Lemus, Eric (2003): La prensa en El Salvador: tolerancia al mejor postor. Revista Latina de Comunicación Social, 54. Recuperado el x de xxxx de 200x de:
<http://www.ull.es/publicaciones/latina/200353lemus.htm>